

De las riñas a la guerra

Hacia una reformulación del diagnóstico de la violencia colombiana

Mauricio Rubio P.¹

I. Introducción

El país ha entrado en una nueva etapa de euforia y optimismo en la búsqueda de la paz. La intensificación del conflicto armado durante el último año, y la abierta amenaza de la subversión al proceso electoral volvieron a colocar en los primeros lugares de la agenda política el tema de la negociación con los grupos alzados en armas. La gran acogida del mandato ciudadano por la paz en las urnas le ha dado un impulso adicional a este proceso.

Las circunstancias anteriores han puesto en evidencia la precariedad del diagnóstico sobre la violencia colombiana que por muchos años ha inspirado las acciones públicas orientadas a su control. La parte más pertinente de este diagnóstico tiene que ver con la idea de que la contribución

del conflicto armado al número de homicidios en el país es baja. Por defecto, se adoptó la visión de una violencia fundamentalmente casual y fortuita, como la que resulta de los problemas de intolerancia entre los ciudadanos.

En este contexto, sorprende la importancia que está recibiendo actualmente el tema de la paz negociada con las organizaciones armadas. Aquí hay una inconsistencia. Si, como se ha venido afirmando por tantos años, el grueso de los muertos en el país poco tiene que ver con el conflicto, las prioridades y los esfuerzos en materia de paz deberían estar orientados hacia otros frentes. Si, por el contrario, resulta ahora fundamental e inaplazable buscar el diálogo con los grupos armados, es porque se les asigna una alta responsabilidad en el elevado número de muertes intencionales que anualmente sufre el país.

¹ Profesor-Investigador. CEDE y Paz Pública - Universidad de los Andes. La mayor parte de este trabajo se hizo dentro del estudio "La Violencia en Colombia - Dimensionamiento y Políticas de Control" financiado y realizado en el marco del Proyecto Red de Centros de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se agradecen los comentarios de Juan Luis Londoño, Rodrigo Guerrero y los demás participantes en los seminarios de dicho proyecto. Una versión de este trabajo fue publicada como Documento de Trabajo No. 11 de Paz Pública, Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia de la Universidad de los Andes. Las interpretaciones, opiniones y posibles errores son responsabilidad exclusiva del autor y el contenido del documento no compromete ni al BID ni a la Universidad de los Andes. Email : mrubio@uniandes.edu.co

Lo que parece haber sucedido es que los hechos desbordaron y desvirtuaron el enfoque convencional sobre la violencia colombiana. Realidades como los desplazados, las masacres, las renunciaciones de los candidatos a las elecciones municipales, el interés internacional por la situación de orden público en Colombia y el tema de los derechos humanos no son fáciles de enmarcar en un escenario dominado por los problemas de convivencia ciudadana. Es cada vez más claro que el diagnóstico fue benigno en cuanto a la contribución de las organizaciones armadas a la tasa de homicidios y que, por el contrario, hizo demasiado énfasis en los conflictos cotidianos entre los colombianos. La evidencia reciente -en particular los avances logrados por parte de Medicina Legal en la recopilación de las causales de los homicidios- y el limitado alcance de las políticas inspiradas en ese diagnóstico sugieren la necesidad de un replanteamiento del mismo. Parece conveniente pasar de las riñas a la guerra como elemento central de análisis de la violencia colombiana. Con este trabajo, se pretende avanzar en esa dirección. Sin desconocer la importancia y relevancia que tuvo en su momento tal visión, se busca señalar sus debilidades, sobre todo en lo relativo a los elementos que no concuerdan con la evidencia disponible.

Fuera de esta introducción y de unas breves reflexiones a manera de conclusión, el trabajo está dividido en cuatro secciones. En la primera

se trata de resumir el diagnóstico convencional sobre la violencia colombiana y se anotan sus principales limitaciones. En la segunda se ofrecen algunos elementos, preliminares, para una caracterización de las localidades colombianas más violentas. En la tercera se presentan algunos datos globales acerca de los tipos de violencia que se están dando en el país. En la cuarta se argumenta que la asociación entre las organizaciones armadas y las muertes intencionales en Colombia es más estrecha de lo que se piensa.

II. El diagnóstico tradicional y sus limitaciones

No cabe duda que, en la última década, el trabajo más comprehensivo e influyente sobre la violencia colombiana es el realizado por la Comisión de Estudios sobre la Violencia -los llamados violentólogos -convocada por la administración Barco en 1987. Como se plantea en la presentación de la edición más reciente del resumen de estos trabajos, "se trata de ideas completamente interiorizadas en el discurso político cotidiano"².

Son varias las características de la aproximación adoptada por la Comisión de Estudios sobre la Violencia que parece conveniente superar para avanzar en la comprensión del complejo escenario actual de la situación colombiana³. La primera es la naturaleza ideológica

² "Como tal es un referente analítico que hace parte ya de lo adquirido en el mundo académico e incluso de lo apropiable por distintas dependencias oficiales. A su manera, se le incorpora también en el diseño de los planes gubernamentales." Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995) presentación a la 4a edición.

³ No sobra aclarar que el énfasis que se le da en este trabajo a los aspectos más debatibles del diagnóstico de los violentólogos no implica desconocer la pertinencia de los numerosos componentes que no se mencionan y que guardan plena vigencia. En ningún momento se trata de sustituir un enfoque por otro. Se pretende aportar elementos para complementar, y hacer más compleja, tal visión.

de algunas explicaciones, entendida bien sea como la formulación de teorías sin el suficiente respaldo empírico o como el planteamiento de ideas en forma de afirmaciones y no de hipótesis susceptibles de ser contrastadas. La segunda es la debilidad de las teorías del comportamiento de los actores de la violencia. Por el contrario, se optó por una aproximación exclusivamente sociológica, en el sentido de analizar las violencias como fenómenos colectivos, con dinámicas autónomas, y totalmente desvinculados de los individuos que toman las decisiones⁴. La tercera característica es la definición de una amplia gama de violencias de acuerdo, no con elementos observables -como las actuaciones de ciertos grupos sociales, o las consecuencias de los actos de violencia- sino con las intenciones de estos grupos. Este punto, sumado a la precariedad de las teorías de comportamiento de los agresores, hace particularmente difícil la formulación de hipótesis contrastables y genera una confusión no deseable entre la explicación de los actos de violencia y la justificación, ex-post, que de ellos ofrecen los agentes violentos. El último punto es la consideración de que unas intenciones son más legítimas que otras⁵, lo que en forma casi

automática lleva a la justificación, abierta o implícita, de la violencia política⁶.

En conjunto, estas características presentan como consecuencia una completa dilución de la responsabilidad de los actos de violencia. Bajo este enfoque los violentos son, o bien individuos forzados por las circunstancias, o bien ciudadanos comunes que presentan, todos, una propensión similar a tal tipo de conductas. Son raros los individuos que, bajo este enfoque, tienen la violencia dentro de sus propósitos y que deban responder por sus decisiones. En forma consecuente, las recomendaciones de política contra la violencia aparecen orientadas bien sea a cambiar las condiciones objetivas que empujan a los violentos⁷ o a medidas preventivas, como la educación o la superación de las dificultades materiales, para la totalidad de la población.

Una de las ideas más controvertibles del análisis de la Comisión, y sobre la cual gira la mayor parte de este trabajo, se resume en dos frases: "el porcentaje de muertos como resultado de la subversión no pasó del 7.51% en 1985, que fue el año tope. Mucho más que las del monte,

⁴ El largo y complejo debate entre la aproximación sociológica clásica, en la tradición de Durkheim, y el llamado individualismo metodológico, dentro del cual se enmarca el enfoque económico del comportamiento, sobrepasa los alcances de este trabajo. Se quiere simplemente llamar la atención sobre la necesidad de complementar ambos enfoques. Para un buen resumen del estado actual del debate, y una propuesta de síntesis entre la visión sociológica y el modelo de agentes racionales, ver Vanberg (1994).

⁵ "No hay una violencia, sino violencias que deben ser jerarquizadas ..." Cita de Jean-Claude Chesnais, *Histoire de la Violence*, Paris, Editions Robert Laffont, 1981. Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995). Presentación.

⁶ Al respecto, es interesante señalar la manera como se desvirtúa la asociación entre narcotráfico y guerrilla con el argumento que tal actividad no hace parte de los objetivos declarados de los grupos subversivos: "En otra dimensión, la incidencia del fenómeno (el narcotráfico) en la actividad de los grupos guerrilleros ha dificultado las gestiones de posible acercamiento a ellos al distorsionar su imagen y asignarles motivaciones y acciones que no se compadecen con sus fines políticos declarados". Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995) pag 87.

⁷ Aún para una actividad tan "de mercado" como el narcotráfico se recomienda que las acciones estatales deben "dirigirse a eliminar las condiciones que hacen atractiva la actividad". Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995), Pag 89.

las violencias que nos están matando son las de la calle⁸". Con un mayor contenido ideológico, más adelante se llega a la siguiente afirmación categórica: "los colombianos se matan más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado"⁹. El principal punto que vale la pena destacar de estas afirmaciones, en efecto categóricas, es la debilidad de la evidencia que podría sustentarlas. En un país en donde, ya en 1986, sólo se capturaban el 20% de los presuntos homicidas y únicamente el 5% de los homicidios se aclaraban¹⁰, parece difícil encontrar una base sólida para adjudicar una cifra tan precisa al porcentaje de muertes resultantes de la subversión, y mucho menos para hacer una generalización tan contundente acerca de las razones por las cuales se matan los colombianos. Conviene aclarar que la precariedad de la información sobre los homicidas, que necesariamente impone una gran cautela en la tipificación de la violencia, ya era un factor conocido en el momento en que se hicieron estas afirmaciones, y lo era por quienes las formularon¹¹. Aún más, cierta información, parcial, analizada por la Comisión contradice abiertamente estas afirmaciones¹².

Lamentablemente, la idea de que sólo una pequeña fracción de las muertes violentas es atribuible al conflicto armado y que, por defecto, el saldo puede asimilarse a problemas de convivencia entre los ciudadanos hizo carrera sin la indispensable aclaración sobre el limitado alcance de los datos disponibles. En 1993 se continuaba afirmando oficialmente que "la mayoría de los homicidios (cerca del 80%) hacen parte de una violencia cotidiana entre ciudadanos, no directamente relacionada con organizaciones criminales"¹³. Actualmente, en los programas locales contra la violencia, como por ejemplo el de convivencia ciudadana de la capital del país, se sigue percibiendo la influencia de las mismas ideas: "es indiscutible que el mayor problema que enfrenta Bogotá es el alto nivel de violencia con que muchos habitantes resuelven sus conflictos cotidianos, ante la absoluta indiferencia por parte del resto de la sociedad"¹⁴.

III. Los municipios violentos

Son básicamente tres las fuentes de información disponibles para aproximarse a la dimensión

⁸ Ibid, pag 18.

⁹ Ibid, pag 27.

¹⁰ Ver Rubio (1996).

¹¹ "Si entre 1980 y 1984 el porcentaje de sindicados que se logró identificar en una ciudad como Cali fué de 51.2%, en 1986 es de sólo 30.7%, y actualmente, si se excluyen los sindicados de homicidio en accidentes de tránsito, se reduce a 13.5%" Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995) pag 217.

¹² "En una observación sistemática de prensa en la ciudad de Cali se encontró que, de ciento veintinueve homicidios sobre los cuales se halló información, cuarenta y cuatro, o sea el treinta y cuatro por ciento, fueron cometidos por sicarios". Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995) pag 67.

¹³ Presidencia de la República (1993) pag 15.

¹⁴ Alcaldía Mayor de Bogotá (1997) "Seguridad y Convivencia - Dos años y tres meses de desarrollo de una política integral" Bogotá, pag 7.

regional de la violencia colombiana en la actualidad¹⁵. Para el período 1990-1995, se cuenta con datos de la Policía Nacional para los 1053 municipios del país. También al mismo nivel de desagregación se dispone de las cifras judiciales de investigaciones preliminares por delitos "contra la vida e integridad de las personas"¹⁶ para los años de 1994 y 1995. Está por último la información de "necropsias por causa de muerte", probablemente la fuente más confiable, que lleva Medicina Legal (ML)¹⁷.

Los 124 municipios colombianos en los cuales ML ha establecido una oficina regional se han ido seleccionando en los últimos años con base en la demanda por servicios de necropsia y presentan en conjunto algunas peculiaridades que vale la pena destacar¹⁸. En primer lugar se trata de localidades con niveles de violencia superiores a los observados en el resto del país. Con el 61.9% de la población, los municipios cubiertos por Medicina Legal (MCML) concentraron, en 1995, el 79.5% de las muertes violentas. De los 160 mil homicidios que, según la información de la Policía Nacional, hubo en el país entre 1990 y 1995 un poco más de 113 mil, o sea el 71% del total, ocurrieron en alguno de los municipios cubiertos por Medicina Legal.

Para una tasa nacional de 88 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh), el promedio en los MCML es de 106 hpcmh mientras que en el resto de los municipios es de 58 hpcmh.

Por otro lado, se puede señalar que en todas las dimensiones de los indicadores de pobreza¹⁹, los MCML muestran una situación más favorable que la del resto del país. De acuerdo con los datos del último censo, un 35.8% de la población colombiana se encuentra por debajo del índice compuesto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En los MCML este porcentaje es del 26% y en los demás municipios es superior al 50%. Mientras que en los MCML un 9% de la población vive por debajo de la línea de miseria, en el resto del país dicho porcentaje alcanza el 25%.

El ejercicio de ordenar los MCML de acuerdo con sus tasas de homicidio y destacar entre estos los más violentos sirve para corroborar estos puntos. Se confirma, en primer lugar, que el grueso de la violencia colombiana está concentrada en unos pocos sitios. Los 20 municipios más violentos del país, en donde habita únicamente el 8.5% de la población dan cuenta del 28.8% de las muertes violentas. En cincuenta

¹⁵ Las cifras sobre defunciones a nivel municipal no se utilizaron puesto que presentan un subregistro global que no es posible diferenciar por causas de muerte. Ver Flórez Carmen Elisa y Méndez Regina (1995) "El Nivel de Subregistro de las Defunciones en Colombia 1990" Mimeo CEDE.

¹⁶ Tal es el título del Código Penal Colombiano que incluye no sólo los homicidios sino las "lesiones personales" o sea los ataques no letales contra las personas. No fue posible obtener las cifras judiciales con un mayor nivel de desagregación.

¹⁷ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

¹⁸ En un principio existía una oficina regional de Medicina Legal únicamente en las capitales de departamento. Al incrementarse la violencia, aumentando así la demanda por servicios de necropsia, se fueron estableciendo oficinas regionales en los municipios que más las demandaban.

¹⁹ Los indicadores de pobreza, tomados del Censo de Población, son para 1993.

localidades, con el 22.6% de los habitantes, ocurren más de la mitad (51.1%) de los homicidios nacionales. Esta concentración de los homicidios en una pequeña fracción de las localidades no significa que deba considerarse la violencia colombiana, en términos per cápita, como un fenómeno exclusivo de las grandes urbes. Si bien es cierto que las tres grandes ciudades -Bogotá, Medellín y Cali- dan cuenta del mayor número absoluto de muertos, Medellín, que entre las ciudades es la más violenta, ocupa un modesto noveno lugar en el ordenamiento de los municipios colombianos de acuerdo con su tasa de homicidios. Entre los diez municipios más violentos del país sólo tres cuentan con una población superior a los 20 mil habitantes. Parecería conveniente, con base en esta información, empezar a replantear la idea de una violencia fundamentalmente urbana. Si a esto se suma el problema cada vez más apremiante de los desplazados se podría sugerir que *tanto como las de la calle, nos están matando las violencias del monte y del campo.*

Otra característica de las localidades con mayor número de muertes intencionales por habitante en Colombia es la de presentar indicadores de pobreza menos desfavorables que los del resto del país. Mientras que, como ya se mencionó, un poco más de uno de cada tres colombianos se encuentra por debajo del índice compuesto de NBI, en los diez municipios más violentos apenas uno de cada cinco habitantes

se encuentra en tal situación. Para la población bajo la línea de miseria los porcentajes respectivos son del 14.9% y del 6.3%.

En uno de los aspectos que parecería razonable encontrar una diferenciación entre los municipios más violentos y los demás sería en el número y la composición de los procesos penales que allí se inician. Si bien en los diez municipios con mayor incidencia de homicidios se inicia un mayor número de sumarios por habitante que en las 124 localidades con regional de ML, en dónde a su vez se abre un mayor número de sumarios que en el resto del país, no deja de sorprender que esta mayor inclinación de la justicia hacia la apertura de investigaciones formales no se dirija a los incidentes que atentan contra la vida. Así, en los municipios en dónde ocurrieron el 22% de las muertes violentas nacionales se iniciaron únicamente el 6.5% de los sumarios por atentados contra la vida.

Las cifras sobre violencia de medicina legal son valiosas no sólo por ser las más confiables sino porque son las únicas que, sin sesgos sistemáticos²⁰, permiten avanzar en el diagnóstico más allá del simple conteo de las muertes violentas.

En el conjunto de MCML tres de cada cuatro de las necropsias realizadas en 1995 tuvieron que ver con homicidios, de los cuales un 68% fue resultado de un ataque con arma de fuego.

²⁰ Es cada vez más claro que en la violencia que llega a los juzgados está sub-representada, de manera sistemática, la violencia profesional y organizada, como la asociada con el conflicto o con el narcotráfico, y que por lo tanto le otorga un énfasis excesivo a los problemas como las riñas o la violencia entre personas conocidas. Ver Rubio (1997). Este punto, crucial para el diagnóstico de la violencia, ya había sido implícitamente reconocido por la Comisión de Estudios sobre la Violencia: "... debe señalarse la dificultad creciente para identificar a los victimarios. En los tradicionales casos de riña, son relativamente fáciles de localizar". Comisión de Estudios sobre la Violencia (1995) pag 217.

Aunque en principio cabría esperar que las diferentes causas de muerte contempladas en las necropsias²¹ sean independientes entre sí es pertinente señalar la existencia de algunas interrelaciones. En particular el homicidio, aún en términos per cápita, presenta una correlación positiva, cercana al 70% con dos de las otras causales de muerte -las accidentales y los suicidios- y entre el 28% y 42% con las otras causales. Puesto que en los municipios más violentos las necropsias reflejan también una incidencia superior al promedio nacional para suicidios, muertes naturales y muertes accidentales²² se sugiere la posibilidad de sesgos de clasificación que hacen que, en los lugares más violentos, parte de los homicidios queden registrados bajo otras formas de muerte. No deja de parecer extraño que un 75% de las diferencias, entre municipios, en las tasas de muertes accidentales, un 62% en las de homicidios y un 59% en las de muertes naturales se expliquen en función de las demás causales.

Con relación a otra valiosa información de Medicina Legal, las diferentes formas, o tecnologías²³, con las cuales se cometen los homicidios, cabe hacer algunas anotaciones. La primera es que, a pesar de que los homicidios con arma de fuego son los que presentan una mayor incidencia, y geográficamente están estrechamente relacionados con el total de las muertes violentas, la asociación entre estas dos variables no es uniforme a lo largo de la escala de violencia. Es justamente en los municipios más violentos

dónde las muertes con arma de fuego se tornan un predictor casi inequívoco del total de los homicidios. La segunda anotación es que las demás modalidades de muerte violenta no son para nada despreciables en el país. Los homicidios con arma blanca, por ejemplo, presentan, entre los MCML, una incidencia promedio de 18.1 hpcmh y alcanzan un máximo de 430 hpcmh. Para otras formas de muerte violenta (asfixia, estrangulamiento..) las cifras respectivas son de 7.9 hpcmh y 92 hpcmh. Así se dejaron de contabilizar las muertes con arma de fuego, las tasas de homicidio colombianas seguirían situándose entre las más altas del continente. El tercer comentario es que las distintas tecnologías del homicidio presentan incidencias que no son independientes entre sí. A nivel municipal, las muertes con arma cortopunzante están bastante asociadas con los homicidios con arma de fuego.

Con relación a este último punto, un interrogante de interés es el relacionado con si las armas de fuego constituyen un factor de riesgo exógeno, que contribuye a la explicación de la violencia homicida o si, por el contrario, se trata de una manifestación adicional de una violencia que se determina por otros elementos. Se puede, en principio, imaginar dos escenarios extremos en términos del rol que juegan las armas. Bajo el primero, las muertes con arma de fuego serían simplemente una de las consecuencias de una violencia determinada por circunstancias diferentes a la disponibilidad de

²¹ Homicidios, suicidios, accidentes, muertes indeterminadas, neonatales y naturales.

²² Sumado al hecho que entre estas dos últimas categorías los datos muestran una correlación positiva y estrecha.

²³ Por accidente de tránsito, arma de fuego, arma cortopunzante y "otras" (asfixia, estrangulamiento).

armas. Bajo el escenario extremo opuesto se invertiría la causalidad armas-violencia y se tomaría como dato exógeno el número de homicidios con armas de fuego, para convertirlo así en el factor que estaría determinando los niveles globales de violencia. Los datos disponibles de Medicina Legal parecen más consistentes con el primer escenario que con el segundo²⁴.

Comparando las cifras de las distintas fuentes sobre homicidios disponibles para 1995 se confirma que en Colombia las cifras de la Policía Nacional, aunque por lo general ligeramente inferiores a los de Medicina Legal, constituyen una fuente confiable de información. Vale la pena por lo tanto analizar lo que muestran estos datos en términos de la evolución de la violencia a nivel regional.

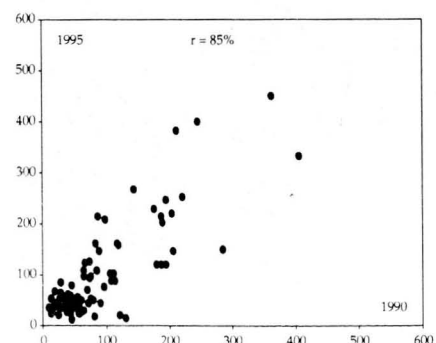
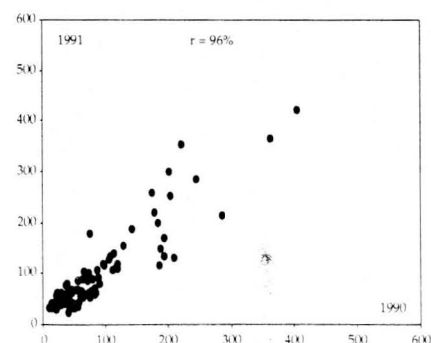
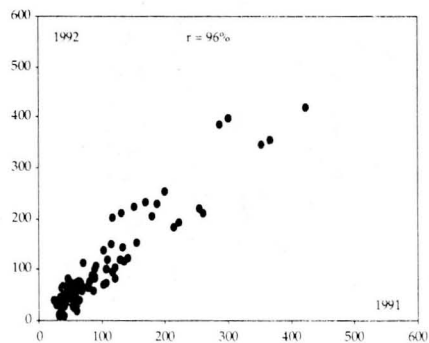
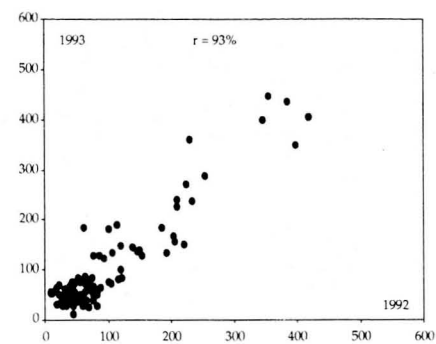
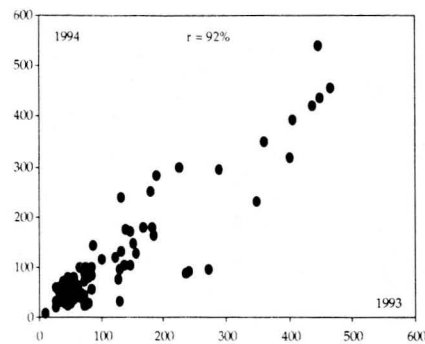
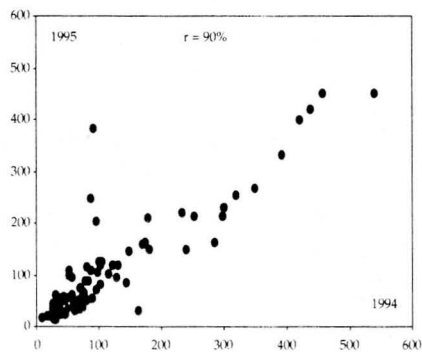
De acuerdo con los datos de la Policía Nacional entre 1990 y 1995 cerca de 500 municipios mostraron una tasa de homicidios, promedio para el quinquenio, superior a 50 hpcmh, 272 tuvieron una tasa superior a 100 hpcmh, 70 municipios presentaron un promedio de 200 hpcmh o más y 24 localidades una cifra superior a los 300 hpcmh.

El aspecto que más se debe destacar de las cifras policiales sobre muertes violentas en los

municipios es que muestran, en forma similar a lo que se observa para los datos agregados a nivel nacional, una considerable inercia. Esta capacidad de la violencia colombiana para persistir y reproducirse se puede captar por varias vías. En primer lugar, por la altísima asociación entre el número de muertes en un municipio en un año determinado y el número de muertes en ese mismo lugar en el año anterior. Como se observa en el Gráfico 1, para los 100 municipios con mayor número de muertes en el período 90-95 las correlaciones entre los datos de dos años consecutivos son siempre superiores al 90%. La segunda característica de estas correlaciones entre los datos municipales de dos períodos es que decrecen con el paso del tiempo. Con contadas excepciones, y como se observa en el Gráfico 2, para cualquier año la correlación más alta se observa con los datos del año inmediatamente anterior o posterior y va descendiendo para los períodos más alejados. Tal tendencia invita a restarle importancia a los factores intrínsecos -culturales, raciales- de cada municipio como elemento explicativo de la violencia y sugiere, por decirlo de alguna manera, un patrón de persistencia móvil, que va desplazándose de un sitio a otro. La inercia también se percibe a través de la evolución de los homicidios en las localidades con mayor número de muertes, que no presentan cambios bruscos de un año a otro.

²⁴ El primer escenario se puede modelar postulando que el número total de homicidios (HT) es el dato exógeno que define el número de muertes que se llevarán a cabo con cada una de las tecnologías disponibles. Así, los homicidios con arma de fuego (HAF) serían una fracción de HT, aquellos con otro tipo de arma serían también una fracción de HT y se definiría una última categoría residual (HR). Así, bajo el escenario 1: HT exógeno, $HAF = \beta_1 \cdot HT$, $HACP = \beta_2 \cdot HT$, $HR = (1 - \beta_1 - \beta_2) \cdot HT$. Bajo el escenario 2, por el contrario, HAF, HACP exógenos, $HT = \partial \cdot HAF$ y $HR = (\partial - 1) \cdot HAF - HACP$. El segundo escenario, que postula los homicidios con arma de fuego como la variable exógena, no es compatible con la estrecha asociación (80%) que se observa entre esta variable y las muertes con arma blanca. Tal correlación, por el contrario, se explica mejor postulando la existencia de un factor subyacente conjunto -como un nivel de violencia determinado por otros factores- tal como se plantea en el primer escenario. Para corroborar este punto se realizó un ejercicio estadístico muy simple: se estimaron los parámetros de los modelos anteriores y se calculó la correlación entre el HR observado y el HR calculado a partir de los parámetros estimados en cada uno de los modelos.

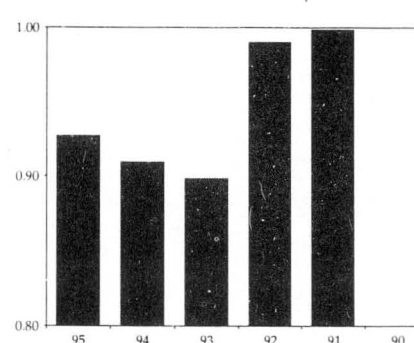
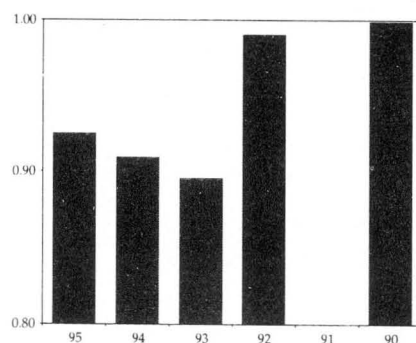
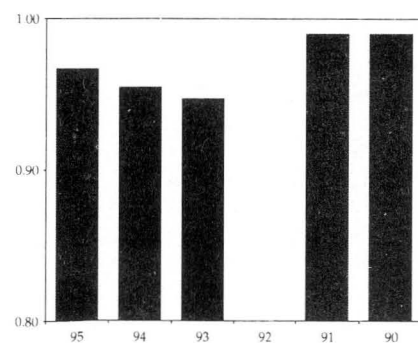
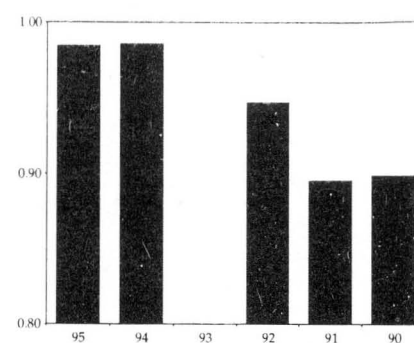
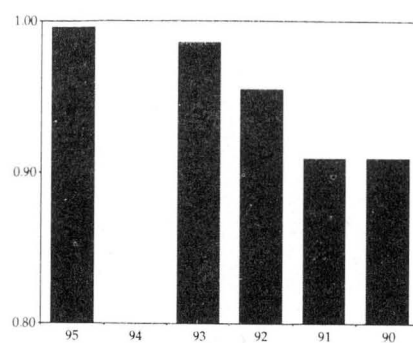
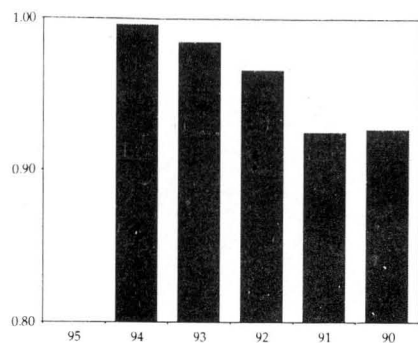
Gráfico 1
HOMICIDIOS POLICIA NACIONAL 1990-1995
100 MUNICIPIOS CON MAYOR NUMERO DE MUERTES
(No incluye Medellín, Bogotá ni Cali)



Nota: Número de cada año en función del anterior.
 Fuente: Policía Nacional.

Gráfico 2

TASAS DE HOMICIDIOS POLICIA NACIONAL 1990-1995
(Correlaciones entre las tasas por municipios de distintos años)



Fuente: Policía Nacional.

En la actualidad, el mejor predictor de la violencia en un municipio colombiano es el número de homicidios observado en ese mismo municipio en el año anterior. Esta inercia local, sumada a los análisis geográficos de la violencia, que sugieren patrones de contagio, constituye una de las vías más promisorias de investigación empírica sobre la violencia²⁵.

Una historia micro analítica compatible con estos patrones que se observan a nivel municipal sería la de unos agentes violentos -como los guerrilleros, los paramilitares o los narcotraficantes- que, por diversas razones, se mueven por el territorio nacional y, al instalarse en una localidad, desatan situaciones de violencia que posteriormente persisten por unos años. No parece, por el contrario, corroborarse con la información disponible la idea de una violencia esencialmente ciudadana que, como por generación espontánea, surge y se perpetúa en los municipios.

IV. Los tipos de violencia

Teniendo en cuenta el precario desempeño de la justicia penal colombiana en la tarea de investigar y aclarar los homicidios es poco lo que se sabe en el país acerca de los agresores, o de las circunstancias que rodean las muertes violentas. Con base en la información de Medicina Legal se pueden obtener algunas luces

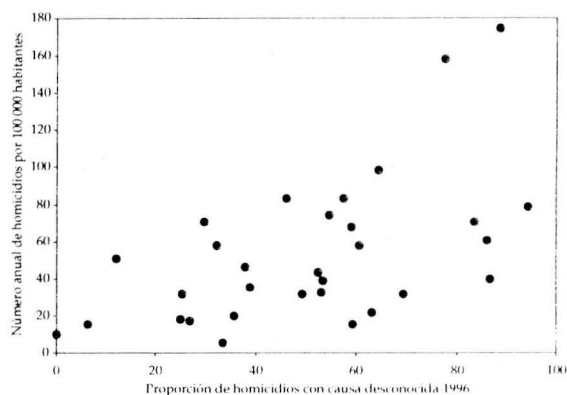
acerca de los distintos tipos de violencia que se dan actualmente en Colombia²⁶.

Un primer punto que vale la pena destacar es que el desconocimiento acerca de las razones por las cuales ocurren los homicidios es proporcional a la intensidad de la violencia. Como se puede apreciar en el Gráfico 3, los datos de Medicina Legal por departamentos para 1996 muestran cómo el misterio alrededor de las causas de los homicidios aumenta con los niveles de violencia. Mientras que en los departamentos con tasas de homicidio inferiores a los 40 hpcmh se conocen las causales en dos de cada tres de los casos, en los departamentos más violentos,

Gráfico 3

VIOLENCIA Y MISTERIO

(Tasa de homicidio y conocimiento de causas)



Nota: Cada punto representa un departamento.
Fuente: Medicina legal, 1996.

²⁵ Utilizando, por ejemplo, metodologías estadísticas desarrolladas por la epidemiología.

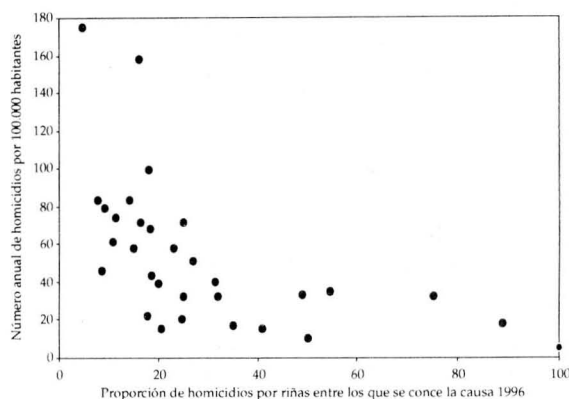
²⁶ La información, a nivel de departamentos y para 1996, está basada en los reportes de los familiares de las víctimas a los médicos legistas. Se consultaron directamente archivos magnéticos suministrados por Medicina Legal. Se agradece la colaboración de Andrés Fernández, Michel Formisano, Germán Pineda y de los funcionarios de Medicina Legal en Bogotá. Estos datos por departamentos no incluyen a Bogotá.

con tasas superiores a 80 hpcmh -y en dónde ocurren la mitad de los homicidios colombianos- esta proporción baja a la mitad. En los lugares con niveles críticos de violencia hay una completa ignorancia alrededor de cerca del 80% de los homicidios.

Las causales reportadas por Medicina Legal sirven para desvirtuar el planteamiento más corriente sobre la tipología de la violencia. Como se observa en el Gráfico 4, la noción de que la violencia colombiana es algo fortuito, causado principalmente por las riñas, parece pertinente únicamente para una pequeña fracción de los homicidios colombianos, precisamente los que ocurren en los lugares más pacíficos.

Es interesante comparar la composición de la violencia en los diez departamentos más sangrientos del país, en donde en 1996 ocurrieron el 68.5% del total de las muertes violentas, y en donde la tasa de homicidios fue de 124 hpcmh, con la observada en los diez departamentos más pacíficos. Es precisamente en estos últimos, que dan cuenta tan sólo del 9.6% de los homicidios y presentan una tasa de 24 hpcmh, en donde los asuntos como las riñas, o la violencia familiar, ocupan un lugar destacado en la caracterización de la violencia. Aún en este caso, el de los departamentos menos violentos, los muertos por problemas de intolerancia (58% del total) muestran en 1996 una participación bastante inferior a la que tradicionalmente se les ha atribuido, superior al 80%. Como se puede apreciar en la Gráfica 5, en los lugares más violentos el atraco y, sobretodo, los ajustes de cuentas desplazan los problemas atribuibles a

Gráfico 4
LA VIOLENCIA FORTUITA
(Tasa de homicidio y muertes por riñas)



Nota: Cada punto representa un departamento.
Fuente: Medicina legal, 1996.

la intolerancia²⁷ como principal causal de los homicidios y sugieren un escenario diferente al de la violencia accidental, o a la asociada con el alcohol, sobre las cuales se ha hecho tanto énfasis en los últimos diez años.

V. Los agentes armados y la violencia

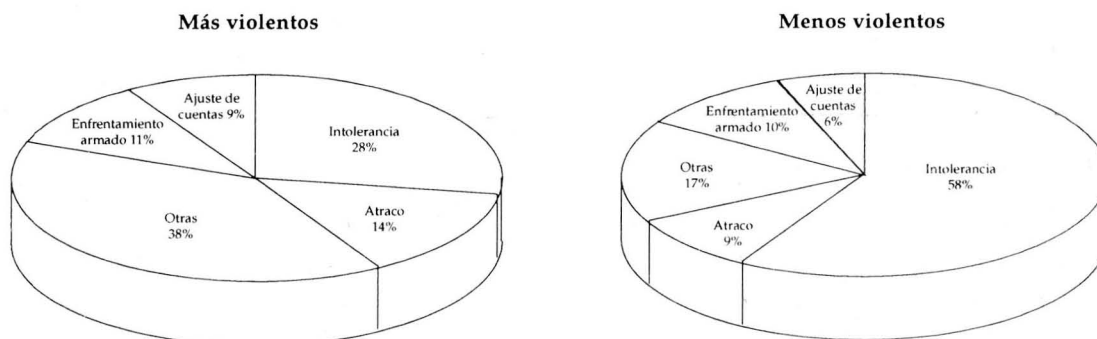
Una dimensión de la violencia particularmente difícil de medir y de cuantificar pero que sería imprudente ignorar para Colombia es la asociada con los diversos agentes armados que operan en el territorio nacional. En la actualidad, son básicamente dos las fuentes de información que se tienen acerca de las actividades de grupos armados en el país. Están por un lado los informes de inteligencia de los organismos de seguridad, a partir de los cuales: (i) se ha construido

²⁷ Se agruparon bajo este rubro las causales de riñas, intolerancia social, violencia conyugal, infantil e intrafamiliar.

Gráfico 5

LOS TIPOS DE VIOLENCIA

(Participación de las distintas causales)



* En el total de homicidios con información sobre causal.
Fuente: Medicina Legal, 1996.

la evolución del número de frentes y efectivos de la guerrilla desde los sesentas y (ii) se pueden clasificar los 1053 municipios con base en el criterio de si hay o no hay presencia de alguno de los siguientes grupos armados: guerrilla, narcotráfico y los llamados grupos paramilitares²⁸.

De acuerdo con esta fuente²⁹, tanto el número de frentes como los efectivos de la guerrilla han crecido continuamente durante las últimas dos

décadas, en forma similar al incremento de la tasa de homicidios.

En la actualidad³⁰ en más del 50% de los municipios colombianos se considera que hay presencia guerrillera, y en cerca de una cuarta parte de ellos se han detectado actividades de narcotráfico o actuaciones de grupos paramilitares³¹. El porcentaje de la población colombiana que vive en una localidad con presencia guerri-

²⁸ Probablemente la mejor tipificación de lo que en Colombia se conoce con el nombre de paramilitares sería la de grupos armados privados dedicados a la lucha anti-guerrillera.

²⁹ En principio, cabe esperar que la información acerca de los grupos armados, sobre la cual es difícil tener algún tipo de verificación, esté sesgada hacia la sobre-estimación. Para los organismos de seguridad una opinión de "no presencia" es costosa puesto que puede ser rebatida por los hechos mientras que la opinión contraria no presenta mayores riesgos. Además, para la fuerza pública, la presencia de grupos armados puede convertirse en un elemento importante de negociación de recursos.

³⁰ La información acerca de la situación actual que aquí se presenta fue suministrada, durante el primer semestre de 1997, por el Ejército Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Esta labor no hubiera sido posible sin la colaboración de Luisa Fernanda Charry, asistente de investigación del proyecto y quien realizó, como trabajo de grado, una buena geografía municipal de los agentes en conflicto.

³¹ En el 9% de los municipios operan simultáneamente los tres tipos de agentes, en el 36% no opera ninguno de ellos y en el 24% actúa únicamente la guerrilla.

llera es del 79%. Para los narcotraficantes y los paramilitares, las cifras son del 55% y del 28% respectivamente. Unicamente el 15% de la población del país reside en municipios libres de la presencia de alguno de estos agentes.

La segunda fuente de información, limitada a la actividad guerrillera, la constituyen los datos recopilados desde hace varios años por la Consejería para la Paz³² acerca de las acciones ejecutadas por la guerrilla. Definiendo como criterio de presencia activa la ocurrencia de diez o más enfrentamientos por año se clasifican los municipios del país. De acuerdo con esta fuente, para 1994 en el 17% de los municipios colombianos, en los cuales habitaba más de la mitad de la población, había una presencia activa de los grupos guerrilleros.

Antes de entrar en el ejercicio de analizar las interrelaciones entre la influencia de estos grupos y los indicadores de violencia, vale la pena preguntarse si su presencia tiene algún efecto perceptible sobre la disponibilidad o la calidad de la información. El análisis simultáneo

de las distintas fuentes sugiere que sí. La información más sensible a la influencia de agentes armados parece ser la de los atentados "contra la vida e integridad de las personas" de las estadísticas judiciales. En efecto, se ha encontrado que la probabilidad de que en un municipio se presente un sub-registro en las cifras sobre violencia que remiten los juzgados -con relación a los datos de homicidios de la Policía Nacional- se incrementa en forma significativa con la presencia de actores armados en ese municipio³³. Los testimonios periodísticos sobre las masacres ocurridas en los últimos meses sugieren que en las zonas de mayor conflicto se puede estar perdiendo la capacidad para contar las muertes violentas³⁴.

La asociación entre violencia y presencia de grupos armados se puede captar en Colombia por varias vías. Trabajos recientes³⁵ señalan una correspondencia geográfica entre la influencia de estos grupos y las tasas de homicidio a nivel municipal. En los últimos años la principal expansión de los grupos armados se ha dado en las localidades cafeteras del centro del país y en

³² Organismo adscrito a la Presidencia de la República.

³³ Además, el hecho de que exista en el municipio una regional de Medicina Legal contribuye a que disminuya la probabilidad de que se observe ese sub-registro. Mientras que en un municipio sin Medicina Legal y libre de actores armados la probabilidad de sub-registro es del 19%, la presencia de la guerrilla sube esta probabilidad al 35% y la de grupos paramilitares al 47%. Una regional de Medicina Legal hace que estas probabilidades se reduzcan al 3%, 7% y 11% respectivamente. El cálculo de estas probabilidades se basa en la estimación de un modelo Logit donde la variable dicotoma dependiente es que exista o no sub-registro y las independientes son la presencia o no de grupos armados en todas sus combinaciones y que haya o no una regional de medicina legal en el municipio. Ver una exposición detallada de este punto en Rubio (1997a).

³⁴ "Incierto era ayer el número de víctimas que dejaron las incursiones de un grupo de autodefensas en Mapiripán (Meta). Aunque en el casco urbano fueron hallados tres cuerpos sin cabezas y otros dos que no fueron identificados, los pobladores aseguran que cerca de 30 personas fueron sacadas de sus casas, mutiladas y arrojadas a las aguas del río Guaviare". Incertidumbre sobre masacre en Mapiripán, *El Tiempo* Julio 22 de 1997.

³⁵ Ver por ejemplo los trabajos, aún no publicados, del Programa de Estudios sobre Seguridad, Justicia y Violencia de la Universidad de los Andes.

las zonas de colonización de frontera, el piedemonte llanero, favorables a los cultivos ilegales. Ambas regiones presentan altos índices de violencia.

Por otro lado, los municipios más violentos del país se distinguen de los demás por una mayor presencia de agentes armados. En nueve de las diez localidades con mayor tasa de homicidios en 1995 había presencia guerrillera activa (contra un 54% a nivel nacional), en siete se habían detectado actividades de narcotráfico (23% para el país) y en otro tanto operaban grupos paramilitares (28% nacional).

Es interesante observar cómo la clasificación de los municipios colombianos de acuerdo con el criterio de si cuentan o no con una regional de Medicina Legal, que como ya se vió es un indicador de problemas serios de violencia, no parece independiente del accionar de los grupos armados. En efecto, mientras que únicamente en un 9% de los 124 que cuentan con una oficina de Medicina Legal no se ha detectado influencia de organizaciones armadas para el resto del país dicho porcentaje es del 40%. Por el contrario, mientras en el 58% de las localidades con Medicina Legal operan dos o más grupos armados, únicamente en el 28% de los demás municipios se da una presencia similar de agentes violentos.

Al aproximarse a la incidencia del conflicto armado no por la proporción de los municipios que lo sufren sino por el porcentaje de la población que vive bajo esa influencia, las diferencias entre los municipios de Medicina Legal y los demás son aún más marcadas. Mientras en el primer grupo únicamente el 2% de los habitantes está libre de la influencia de algún grupo armado, en el resto del territorio nacional dicho

porcentaje es del 40%. En el otro extremo, el 84% de los pobladores de los municipios con Medicina Legal vive bajo la influencia de más de uno de los grupos armados. Esta cifra se reduce al 33% en las localidades en donde Medicina Legal no ha considerado aún necesario establecer una regional.

Casi la totalidad (93%) de los homicidios registrados en Colombia en 1995 ocurrieron en municipios en donde se ha detectado la presencia de alguno de los tres principales grupos armados que operan en el país. Más del 75% de las muertes intencionales ocurrieron en localidades en donde confluyen dos o tres de estos agentes. Únicamente el 12% de las muertes violentas en 1995 sucedieron en sitios libres de la influencia de la guerrilla.

A pesar de su baja participación en el total de la violencia colombiana, las muertes que ocurren en los municipios sin presencia de agentes armados son analíticamente muy útiles puesto que constituyen una sub-muestra no contaminada que, en sentido estricto, es la única que permite estudiar los factores de riesgo de la violencia colombiana diferentes del conflicto armado. Un 36% de los municipios colombianos se pueden considerar ajenos a la influencia de los grupos armados. En ellos habita el 14.9% de la población colombiana y se presentaron en 1995 el 6.5% de las muertes violentas intencionales. Aunque sigue siendo elevada para los estándares internacionales, la tasa de homicidios de 39 hpcmh que se presenta en esta parte de Colombia se asemeja más al promedio latinoamericano.

La asociación precisa entre la violencia y la presencia de grupos armados no es fácil de

establecer, ni siquiera conceptualmente. El punto que se quiere destacar es que, más allá de las muertes ordenadas o ejecutadas directamente por miembros de las organizaciones armadas, es necesario tener en cuenta las que, de una u otra manera ocurren, o se ven facilitadas, por la presencia en un municipio de tales actores. En este sentido, la información disponible sugiere un efecto no despreciable de los grupos armados en dos aspectos: en el desempeño de la justicia penal y en la difusión de la tecnología para matar.

Con relación al primer punto, los datos muestran que la presencia de organizaciones armadas en un municipio afecta: (1) el número de denuncias sobre hechos criminales que los ciudadanos elevan ante la justicia; (2) el número de investigaciones formales o sumarios que, por cada denuncia, emprende la justicia penal y (3) la prioridad que, en materia de investigación, la justicia penal le otorga a los atentados contra la vida³⁶.

Con relación al segundo aspecto, los datos sugieren un efecto de los grupos armados sobre la utilización de armas de fuego en los ataques a las personas. A pesar de la alta correlación que, a nivel municipal, y de acuerdo con la información de Medicina Legal, se observa entre

los homicidios con tecnologías primitivas y aquellos cometidos con arma de fuego, la participación de estos últimos en el total de muertes intencionales, con un promedio del 78% muestra importantes variaciones por municipios, desde un 20% hasta un 100%. Puesto que los homicidios con arma de fuego son un buen predictor del total de homicidios, parece pertinente tratar de entender qué elementos contribuyen a la adopción de una u otra tecnología. En principio, cabe esperar que en los lugares menos violentos, menos desarrollados, y menos urbanizados, se presente una mayor tendencia a utilizar las armas más primitivas. En forma extraña se encuentra que estos factores contribuyen poco a la explicación de las diferencias observadas en la tecnología predominante para matar³⁷.

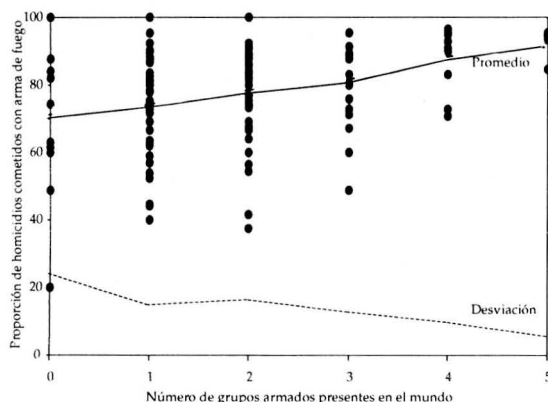
Por otro lado, la presencia de grupos armados en el municipio, sí contribuye a la explicación de la escogencia de técnica para cometer los homicidios. Aunque la relación está lejos de ser lineal, los datos muestran con claridad que al aumentar el número de grupos armados³⁸ que actúan en un municipio se incrementa la fracción de homicidios con arma de fuego y, además, se vuelve ésta la tecnología predominante-disminuye su varianza-. Como se observa en el Gráfico 6, mientras en los municipios en donde no actúa ninguno de los tres principales

³⁶ Ver Rubio (1997a).

³⁷ Sorprende, por el contrario, que los indicadores de pobreza muestren una asociación positiva con la utilización de armas de fuego y negativa con la de otras armas. Aunque el porcentaje de la población por debajo de la línea de miseria explica tan sólo un 9% de las variaciones en la proporción de homicidios cometidos con arma de fuego, su efecto es positivo y estadísticamente significativo. Los indicadores de urbanización utilizados, la población de cada municipio y la proporción de ésta que vive en la cabecera no mostraron ningún efecto. Tampoco se capta una influencia de la tasa de homicidios.

³⁸ Se consideran como agentes armados los tres grupos guerrilleros (FARC, ELN y EPL) los paramilitares y los narcotraficantes.

Gráfico 6
PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS Y
TECNOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA (Datos por municipios para 1995)



Nota: Cada punto representa un municipio.

Fuente: Medicina Legal. Ejército y Policía Nacional - Charry (1997).

grupos guerrilleros, ni los paramilitares, ni los narcotraficantes, el porcentaje de muertes con arma de fuego empieza en el 20%, y muestra un promedio del 70%, para los municipios en donde actúan todos estos agentes, el promedio sube a más del 90% y en ninguno de estos se observa una proporción inferior al 80%.

VI. Conclusiones

El renovado afán por alcanzar la paz, y el énfasis en la violencia asociada con el conflicto armado, tienen un buen asidero en la realidad. Por varios años, la visión oficial sobre la violencia colombiana, y las políticas públicas inspiradas en esa visión, se basaron sin mayores reservas en el diagnóstico, propuesto por los llamados violen-

tólogos a finales de la década pasada, que minimizaba el impacto del conflicto armado sobre la violencia. La evidencia reciente invita a una reformulación de este diagnóstico. Cada vez parece más clara, y mayor, la responsabilidad de las organizaciones armadas en el elevado número de muertes violentas que anualmente ocurren en el país.

La información disponible, que sigue siendo precaria, sugiere varios puntos novedosos acerca de la violencia colombiana actual. En primer lugar el problema está lejos de ser, como se pensaba, esencialmente urbano. En segundo término no parece corroborarse la vieja noción de las causas objetivas de la violencia. Los patrones migrantes, la persistencia local y el contagio invitan, de manera alternativa, a pensar en factores de riesgo con una gran movilidad, como la que tienen las diversas organizaciones armadas que actúan a lo largo y ancho del territorio nacional. Parafraseando a los campesinos de las zonas del Tolima, el Valle y el Viejo Caldas en las épocas de la violencia política de los "chulavitas", los datos actuales invitan más a referirse al momento en que "llega la violencia" a un municipio que al momento en que "comienza la violencia"³⁹.

El alcance de las políticas dirigidas a mejorar los niveles de tolerancia entre los ciudadanos, o a ampliar la gama de los mecanismos para resolver sus conflictos cotidianos, ha sido limitado. Simultáneamente, la proliferación de mecanismos privados de seguridad, y aún de justicia, los repetidos incidentes de masacres, la preocupación internacional por la situación de derechos hu-

³⁹ Sánchez (1989).

manos en el país, las amenazas al proceso electoral, y el creciente fenómeno de los desplazados sugieren para la violencia colombiana de hoy un escenario más de guerra que de riñas. El reciente "voto por la paz, la vida y la libertad", depositado por cerca de diez millones de ciudadanos, dirigido a los actores del conflicto armado pidiendo no más guerra, no más atrocidades y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario tiende a corroborar esta percepción de la situación.

Desafortunadamente, el conocimiento que se tiene en el país sobre la dinámica del conflicto y sobre las motivaciones de los diversos actores que participan en él es limitado. Las visiones predominantes están polarizadas y son, en esencia, maniqueas. Para la guerrilla, por ejemplo, están quienes siguen pensando en un grupo de rebeldes, con completa uniformidad de criterio y objetivos, que en representación de la población oprimida buscan un cambio en las relaciones sociales y las estructuras de poder existentes. Están, en el otro extremo, quienes ven en estas organizaciones unas simples bandas de criminales, motivadas exclusivamente por el lucro económico y sin aspiraciones políticas. La realidad guerrillera se insinúa bastante más compleja. Para los grupos paramilitares la situación es similar. Se enfrentan posiciones radicalmente opuestas que los asimilan bien sea a cuadrillas de asesinos al servicio de la

oligarquía rural, bien sea a la única salida viable y efectiva al problema de la subversión.

Las interrelaciones entre las distintas organizaciones armadas, legales e ilegales, no han sido analizadas en forma sistemática y objetiva. Su impacto sobre la violencia apenas empieza a comprenderse.

Lo que muestra la información disponible es que la responsabilidad del conflicto en el número de muertes violentas va más allá del simple conteo de las bajas en los combates. Hay en los datos señales de efectos indirectos, como por ejemplo a través del deterioro en el desempeño de la justicia penal o de la difusión de la tecnología de la guerra.

La persistencia de la violencia a nivel municipal, evidente en los datos, sumada a los testimonios sobre las peculiaridades locales de los grupos armados⁴⁰, sugiere unas estructuras de poder en extremo segmentadas. Resulta difícil de compartir el optimismo que reina actualmente sobre la viabilidad de un diálogo entre en Estado más que descentralizado, fragmentado, y unos grupos paraestatales armados, económicamente poderosos, también divididos, algo rebeldes, algo criminales, algo mafiosos, algo populares, algo clientelistas ... cuyo único denominador común parece ser el afán, primario, de controlar territorios.

⁴⁰ Ver por ejemplo, Corporación Región (1997) "Una aproximación a la Conflictividad Urbana en Medellín", Medellín: Mimeo.

Bibliografía

- Comisión de estudios sobre la violencia (1995), Colombia: Violencia y Democracia, Bogotá: IEPRI, Universidad Nacional, Colciencias. Cuarta Edición.
- Corporación Región (1997) "Una aproximación a la Conflictividad Urbana en Medellín", Medellín: Mimeo.
- Klevens, Joanne (1997) "Lesiones de causa externa, factores de riesgo y medidas de prevención", Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Presidencia de la República (1993) "Seguridad para la gente - Segunda fase de la Estrategia Nacional contra la Violencia", Bogotá.
- Rubio Mauricio (1996) "Crimen sin Sumario - Análisis Económico de la Justicia Penal Colombiana" Documento Cede 96-04, Bogotá: Universidad de los Andes.
- _____ (1997) "Percepciones Ciudadanas sobre la Justicia - Informe final de Investigación", Mimeo, Bogotá: Ministerio de Justicia, CIJUS, Universidad de los Andes.
- _____ (1997a) "La Justicia en una sociedad violenta" Documento de Trabajo Paz Pública No. 5, Bogotá: Universidad de los Andes.
- Sánchez, Gonzalo (1989) "Violencia, guerrillas y estructuras agrarias" en Nueva Historia de Colombia, Vol II, Bogotá: Planeta, pags 127 a 152.
- Vanberg Viktor (1994), Rules & Choice in Economics, New York: Routledge.